

de ciudades como Viña del Mar y Concón. Finalmente, es necesario hacer un llamado a las empresas avisadoras: el pago de derechos municipales no acredita la legalidad de un soporte publicitario. La única garantía es contar con el permiso de la DOM asociado a su ubicación específica. Asumir lo contrario no solo perpetúa un error extendido, sino que termina financiando instalaciones irregulares y empresas que no están apegadas a la ley.

ANTONIO PEROCARPI H.  
Director Tell Magazine Chile

## Seguridad

Señor Director:  
La mayoría aceptó el trato: menos Estado, más orden. Pero en Chile hoy se disparan dos cosas: la UF y los balazos. Cuando la promesa central no se cumple y encima tiene costo social, la frustración multa en algo manipulable. Eso, en cualquier democracia, es suicidio político —lento, pero seguro.

AMARO GÓMEZ-PABLOS

## Acuerdos políticos sostenibles

Señor Director:  
Agradecemos la columna de ayer de Fernando Claro y la oportunidad de debatir un tema de fondo: cómo construir acuerdos políticos sostenibles para que Chile vuelva a crecer. Nuestro punto era simple: las reformas estructurales requieren estabilidad política, legitimidad social y capacidad de sostenerse en el tiempo. Más aún, en un país fragmentado y con bajo crecimiento. Por eso no es casualidad que inversionistas, organismos técnicos y economistas de distintos sectores valoren acuerdos amplios y sostenibles por sobre mayorías circunstanciales o negociaciones improvisadas.

El Consejo Fiscal Autónomo, por ejemplo, ha advertido la necesidad de asegurar sostenibilidad fiscal al proyecto previsional. La reciente reforma de pensiones mostró que, con método, urgencia y disposición política, es posible avanzar incluso entre sectores que piensan distinto. No porque desaparezcan las diferencias, sino porque existe conciencia de que el costo de no hacer nada puede ser mayor.

Y aquí aparece un punto político de fondo. Debilitar los acuerdos y reemplazarlos por una lógica de fragmentación permanente no es neutro: fortalece a quienes prosperan precisamente en el deterioro del sistema político. Habrá que asumir entonces las consecuencias prácticas de ese camino.

MARTA JOSÉ ABUO  
HERNÁN LARRAÍN

Centro de Estudios Horizontales

## Una alternativa estéril

Señor Director:  
Una desafortunada referencia del Presidente Kast a la inversión en investigación y al riesgo de que ella acabe en libros que no salen de las bibliotecas, ha desencadenado una discusión que amenaza con ser inconducente.

En el mundo académico se suele reconocer sin dificultad que estamos ante una crisis multidimensional (que implica preguntas por cuán sano es el sistema de publicaciones indexadas, por cuánto hay de captura ideológica en algunos campos, por la brecha universidad-sociedad, y muchas cuestiones más). Comentarios como el del Presidente, sin embargo, llevan a que esa autocritica se apague y el gremio pase a un discurso puramente defensivo.

Para salir de aquí parece fundamental reconocer la profundidad del problema. Quien escarba un poco en las materias de investigación que se han financiado fácilmente encontrará ejemplos indignos de recibir apoyo estatal. ¿Por qué? No, ese no es el problema. El conocimiento sin utilidad práctica inmediata está en el corazón de la tarea universitaria. Pero que esa sea nuestra primera pregunta deja al desnudo lo pobre que es la alternativa: si no se trata del solo “retorno social”, creemos que no hay modo de jerarquizar objetos de estudio o preguntas de investigación.

A un lado tenemos un craso relativismo posmoderno, incapaz o indispuerto a enfrentar esta cuestión; al otro lado, un igualmente craso pragmatismo que solo sabe responderla en términos de utilidad. Dejada atrás la escaramuza del momento, este es el tipo de alternativa que debemos trabajar por dejar atrás.

MANFRED SVENSSON

## “500 millones”

Señor Director:  
A propósito de la carta (viernes) de Magdalena Price Eiton, llamo la atención que su inquietud por el uso de fondos públicos se concentre exclusivamente en proyectos de estudios de género y ciencias sociales. Más que una preocupación por la transparencia —con la que por cierto coincidimos—, lo que parece incomodar es que el Estado financie, vía concursos abiertos y competitivos, investigación en estas áreas.

ANID adjudica sus fondos a través de comités evaluadores y procesos rigurosos; que los proyectos seleccionados resulten o no afines al Gobierno de turno nada dice respecto de su calidad o pertinencia.

Pero conviene elevar la discusión. La ciencia —básica o social— no se evalúa por su aplicación directa ni por su retorno inmediato, sino por las transformaciones que produce en plazos largos y por externalidades que ningún indicador captura de manera acabada. Esa es la lógica del Premio Nobel: en 2023, sin ir más lejos, fue otorgado a Claudia Goldin, en Economía, por su trabajo pionero sobre la participación femenina en el mercado laboral y las brechas salariales de género —exactamente el tipo de investigación que la mencionada carta pretende ridiculizar.

Si ese criterio basta para reconocer lo más relevante del pensamiento mundial, debería bastar también para que ANID financie ciencia en Chile, sin necesidad de poner el cascabel al gato cada vez que una investigación incomoda. Convertir la incomodidad ideológica en criterio de evaluación no es rigor fiscal: es una forma de censura.

BÁRBARA BOGOLANO; MARÍA TERESA ROJAS;  
VALENTINA NIÑO; SONIA BRITO;  
LIETA VIVALDI; VICTORIA MARTÍNEZ;  
SANDRA VERA

Académicas Programa de Investigación de Género y Diversidad Sexual, Universidad Alberto Hurtado

## Investigación e innovación

Señor Director:  
Desconocer el valor de la investigación es renunciar al desarrollo, qué duda cabe. Sin embargo, que no se traduzca en innovación es amparar a quienes estiman que es un derroche.

ADOLFO ARATA ANDREANI

## Doble estándar fiscal

Señor Director:  
Durante estos días hemos escuchado a exautoridades y parlamentarios de la administración anterior invocar el informe del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) para advertir sobre los elevados riesgos fiscales del proyecto de ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico.

Cabe recordar que varios de quienes hoy lo citan como argumento para rechazar el proyecto fueron los mismos que, cuando gobernaron, desatendieron reiteradas alertas del CFA. Tanto sobre las estimaciones optimistas de ingresos como sobre el riesgo de incumplimiento de las metas fiscales. La suma de las desviaciones advertidas por el CFA y expertos equivale a US\$ 14.000 millones (4% del PIB).

Algo similar ocurrió con el proyecto de cumplimiento tributario (para reducir la evasión y la elusión), que prometía recaudar el 15% del PIB. Tanto el FMI como el CFA advirtieron que probablemente se recaudaría un tercio de lo prometido. Pero, nuevamente, las advertencias fueron ignoradas y se comprometió el gasto permanente.

Cuán distinta sería hoy la situación fiscal si esas recomendaciones se hubieran atendido a tiempo. Por eso, hoy, la ciudadanía tiene derecho a saber por qué estas exautoridades y parlamentarios aplican a las recomendaciones del CFA un estándar distinto al que utilizaron cuando eran gobierno. Porque cuando las advertencias del CFA se toman en serio solo cuando sirven para criticar al adversario, no estamos ante la prudencia fiscal. Es simplemente un doble estándar.

MATÍAS ACEVEDO F.  
Economista

## Conversar sin imposiciones

Señor Director:  
A propósito de la carta de ayer de Mariana Aylwin y otros señores, concuerdo, es hora de los acuerdos amplios. Llevamos más de 10 años de gobiernos con oposiciones cerradas y destructivas. Bachelet 2, Piñera 2, Boric, los tuvieron, y ahora Kast la sufre de forma similar a Piñera y Boric.

En medio, dos procesos constituyentes, uno cargado a la izquierda, el otro a la derecha, rechazados por la ciudadanía. Hay que cerrar este ciclo tan negativo y para ello se requieren acuerdos amplios.

El proyecto de Reconstrucción tiene un sesgo refundacional en la invariabilidad tributaria, la propone para todo tipo de proyectos y tributos; para chilenos o extranjeros por hasta 50 años (25+25), creando un subsistema de grandes empresas con privilegios extraordinarios; limita seis futuros gobiernos; ata al Estado y, lo más grave, da una ventaja que atenta contra la libre competencia dejando en desventaja a grandes empresas con proyectos inferiores a US\$ 50 millones y a las medianas y pequeñas, que no tendrán las ventajas, generando distorsiones de mercado y alertando la concentración económica.

Para terminar con el ciclo refundacional hay que partir reconociendo nuestros propios excesos, abriéndonos al diálogo franco y constructivo con mucho amor por Chile. Los desafíos fiscales, tributarios y sociales nos esperan, y para ello gobierno y oposición deben sentarse a conversar, sin imposiciones.

Como diputado de oposición he dado pasos claros en ese sentido y seguiré. La carta aludida nos recuerda un episodio de falta de acuerdos y sus consecuencias. Hay más. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Al ministro Quiroz le digo, lo esperamos.

JAIME MULET  
Diputado FRVS

